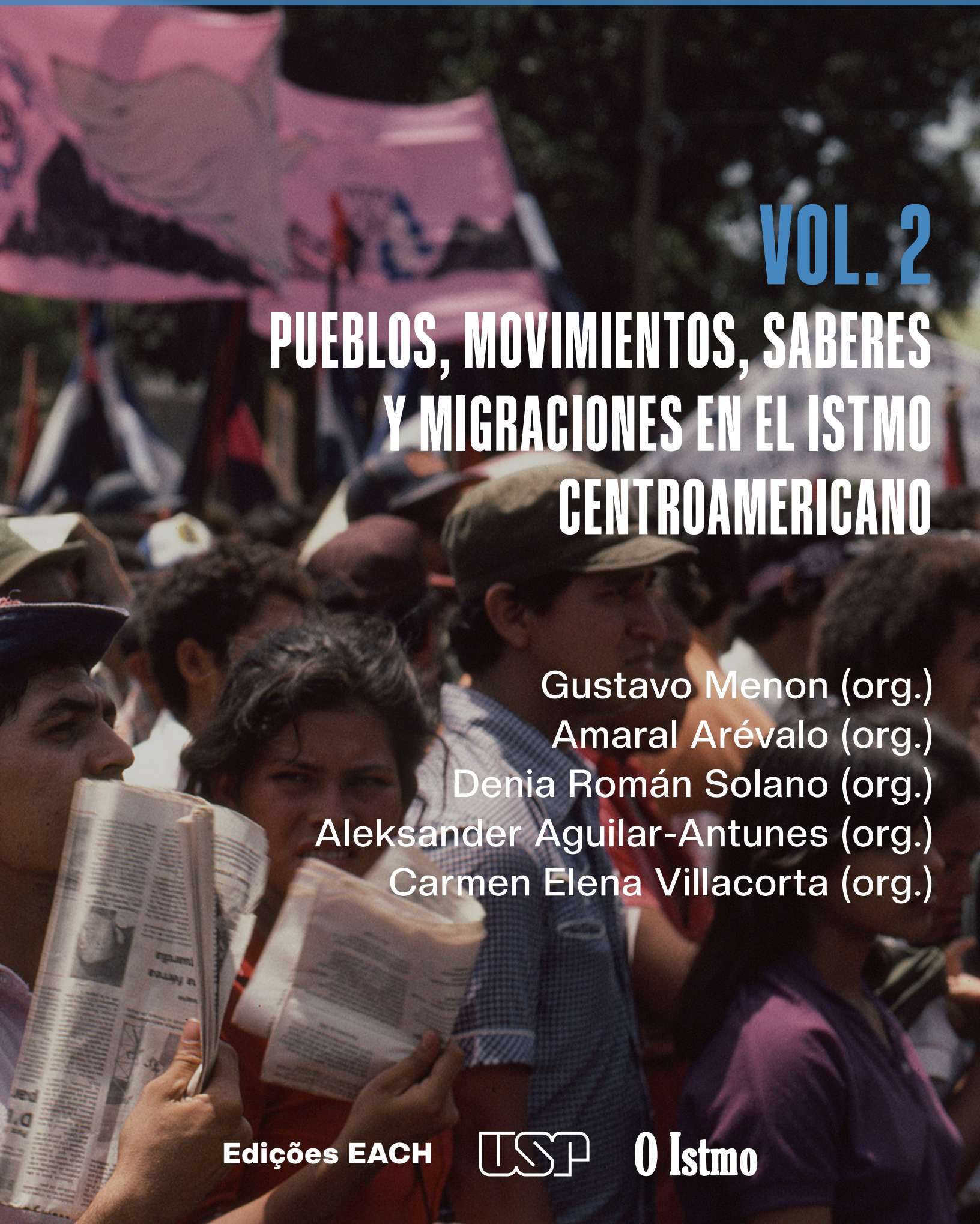
SERIE: AMÉRICA CENTRAL EN PERSPECTIVA ÍSTMICA



VOL. 2

PUEBLOS, MOVIMIENTOS, SABERES Y MIGRACIONES EN EL ISTMO CENTROAMERICANO

Gustavo Menon (org.)
Amaral Arévalo (org.)
Denia Román Solano (org.)
Aleksander Aguilar-Antunes (org.)
Carmen Elena Villacorta (org.)

Edições EACH USP O Istmo

SERIE
AMÉRICA CENTRAL EN PERSPECTIVA ÍSTMICA

Vol. 2

Pueblos, Movimientos, Saberes y Migraciones en el istmo centroamericano

Gustavo Menon (org.)
Amaral Arévalo (org.)
Denia Román Solano (org.)
Aleksander Aguilar-Antunes (org.)
Carmen Elena Villacorta (org.)

SÃO PAULO
EDIÇÕES EACH
2023

DOI: 10.11606/9786588503430

Esta obra es de acceso abierto. Se permite la reproducción parcial o total de esta obra, siempre que la fuente y autoria sean citadas y se respete la indicación de la Licencia Creative Commons indicada

2023 – Escola de Artes, Ciências e Humanidades/USP
Rua Arlindo Bettio, 1000 – Vila Guaraciaba
Ermelino Matarazzo, São Paulo (SP), Brasil
03828-000

“Los análisis y opiniones vertidas en los textos aquí recogidos son de única y exclusiva responsabilidad de sus autores”.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Reitor — Prof. Dr. Carlos Gilberto Carlotti Junior
Vice-Rector — Profa. Dra. Maria Arminda do Nascimento Arruda

ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES

Director — Prof. Dr. Ricardo Ricci Uvinha
Vice-Diretor — Profa. Dra. Fabiana de Sant’Anna Evangelista

Conselho Editorial das Edições EACH

Prof. Dr. Jefferson A. Mello (Presidente -EACH/USP – Brasil)
Profa. Dra. Ana Paula Fracalanza (EACH/USP – Brasil)
Analúcia dos Santos V. Recine (EACH/USP – Brasil)
Profa. Dra. Anna Karenina A. Martins (EACH/USP – Brasil)
Profa. Dra. Clara Vasconcelos (Universidade do Porto – Portugal)
Prof. Dr. Daniel Hoffman (Rutgers University - EUA)
Profa. Dra. Flávia Mori Sarti (EACH/USP – Brasil)
Maria Fátima dos Santos (EACH/USP – Brasil)
Prof. Dr. Michel Riaudel (Sorbonne Université – França)
Profa. Dra. Rosely A. Liguori Imbernon (EACH/USP – Brasil)
Profa. Dra. Verónica Marcela Guridi (EACH/USP – Brasil)

Publicación

Organizadores — Gustavo Menon Amaral Arévalo; Denia Román Solano; Aleksander Aguilar-Antunes; Carmen Elena Villacorta
Revisión filológica — Ariana Alpizar Lobo; Carmen Elena Villacorta
Diseño y diagramación — Luciana Gallegos Volio; Fabiola Palacios Murillo

DADOS INTERNACIONALES DE CATALOGACIÓN EN LA-PUBLICACIÓN
Universidade de São Paulo. Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Biblioteca.
Maria Fátima dos Santos (CRB-8/6818)

Pueblos, movimientos, saberes y migraciones en el istmo centroamericano / [organizadores] Gustavo Menon ... [*et al*.] – São Paulo : Edições EACH, 2023.
1 ebook. – (América Central em perspectiva ístmica ; 2)

ISBN 978-65-88503-43-0 (recurso electrónico)
DOI 10.11606/9786588503430

1. História da América Central. 2. Movimientos sociales – América Central. 3. Resistencia - América Central. 4. América Central – Aspectos sociales. 5. América Central - Aspectos políticos. 6. América Central - Aspectos económicos. I. Menon, Gustavo, org. II. Gómez Arévalo, Amaral Palevi, org. III. Román Solano, Denia, org. IV. Aguilar Antunes, Aleksander, org. V. Villacorta Zuluaga, Carmen Elena, org. VI. Série.

CDD 22. ed. – 972.8

Cómo citar la publicación (ABNT 6023:2018):
MENON, G.; GÓMEZ ARÉVALO, A. P.; ROMÁN SOLANO, D.; AGUILAR ANTUNES, A.; VILLACORTA ZULUAGA, C. E. (org.). **Pueblos, movimientos, saberes y migraciones en el istmo centroamericano**. São Paulo: Edições EACH, 2023. 1 ebook. (América Central en perspectiva ístmica; 2). DOI 10.11606/9786588503430.

Cómo citar el capítulo de esta publicación (ABNT NBR 6023: 2018):
APELLIDO, Iniciales del nombre; APELLIDO, Iniciales del nombre; APELLIDO, Iniciales del nombre. Título del capítulo.. *In*: MENON, G.; GÓMEZ ARÉVALO, A. P.; ROMÁN SOLANO, D.; AGUILAR ANTUNES, A.; VILLACORTA ZULUAGA, C. E. (org.). **Pueblos, movimientos, saberes y migraciones en el istmo centroamericano**. São Paulo: Edições EACH, 2023. 1 ebook. (América Central en perspectiva ístmica; 2). DOI 10.11606/9786588503430.

FICHA TÉCNICA

Comité científico:

Abelardo Morales Gamboa. Universidad Nacional, Costa Rica

Albino Chacón Gutiérrez. Universidad Nacional, Costa Rica

Andrés Jiménez Corrales. Universidad de Costa Rica

Guillermo Navarro Alvarado. Universidad de Costa Rica

Luis Aguilar Vásquez. Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

Pauline Martín. Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

Revisión filológica:

Ariana Alpizar Lobo

Carmen Elena Villacorta

Diseño y diagramación:

Luciana Gallegos Volio

Fabiola Palacios Murillo

Los análisis y opiniones expresadas en los textos aquí reunidos son de entera y exclusiva responsabilidad de sus autores y autoras.

TABLA DE CONTENIDOS

Prefacio
Gustavo Menon
1

Introducción
Entre puente y estrecho: el istmo centroamericano
Aleksander Aguilar-Antunes, Amaral Arévalo,
Carmen Elena Villacorta & Denia Román Solano
4

1. Literatura centroamericana:
entre la tradición y el presente en transformación
Mauricio Espinoza, Gloria E. Chacón & Nicasio Urbina
35

2. "Esto no es el cuerpo de todos". El papel de la fotografía en las recientes movilidades humanas centroamericanas. Una mirada crítica
Guillermo Acuña González
80

3. Protestas sociales y pueblos en movimiento en Centroamérica: una mirada panorámica a los casos de Costa Rica y Nicaragua (2000-2021)
Sofía Cortés Sequeira & Ronald Sáenz Leandroz
108

4. Educación en América Central: entre el capitalismo salvaje y la sociedad del saber crítico
Briseida Barrantes & Giovanni Beluche
148

5. Cocinas del istmo: saberes, sabores y poderes en la olla centroamericana

Giselle Chang Vargas & Gloria Lara Pinto

187

6. Espiritualidades insubordinadas en Centroamérica. Resistencia, significados e importancia en el istmo

Nelise Wielewski Narloch & Amanda Rodríguez Vargas

231

7. Autonomías indígenas en el sur del istmo centroamericano. Los Pueblos Gunadule y Miskito

Salvador García & Bernal Castillo

268

8. Gobiernos comunales en el Caribe nicaragüense: Resistencia del ayer en las luchas de hoy

Amanda Martínez E. & Dolene Miller Bacon

303

Sobre las personas autoras y organizadoras

340

3

PROTESTAS SOCIALES Y PUEBLOS EN MOVIMIENTO EN LA CENTROAMÉRICA: UNA MIRADA PANORÁMICA A LOS CASOS DE COSTA RICA Y NICARAGUA (2000-2021)

Sofía Cortés Sequeira

Ronald Sáenz Leandro

Introducción

En términos generales, desde principios de la década de los noventa, la región centroamericana se ha visto inmersa en un doble proceso de pacificación armada y apertura económica. Las contradicciones y desniveles en torno a los impactos de las políticas de shock neoliberales, sin embargo, lejos de consolidar "ciudadanías de baja intensidad" han motivado una movilización constante de la ciudadanía en torno a diversas demandas sociales insatisfechas, ahora sin guerras civiles, pero con nuevos (y viejos) problemas y tipos de violencia.

El trabajo comparativo de Almeida (2014) da cuenta de la tónica evidenciada en la dinámica de las campañas o ciclos de protesta en Centroamérica entre 1990 y el 2010, sobre todo desde el periodo abierto con las transiciones hacia regímenes democráticos y el desarme de las guerrillas: el autor afirma que, aunque los países suelen presentar coyunturas paradigmáticas en ciertos momentos, el hilo que los une son los distintos tipos de manifestaciones en contra de la aplicación de reformas estructurales de corte neoliberal. Este hallazgo no solo permite ubicar la dinámica de la movilización en la región, sino que ayuda a abrir un diálogo en torno a movimientos transnacionales y líneas generales de la protesta social en la era de la globalización económica.

Al analizar los ciclos de movilización en su conjunto, puede afirmarse que Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá coinciden en haber presentado movimientos bastante importantes en oposición a la privatización de servicios públicos, tales como la salud, el agua y las telecomunicaciones, pero también, entrado el siglo XXI, fuertes campañas en contra del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y República Dominicana y los Estados Unidos. Más recientemente, Guatemala ha visto nacer contiendas de protesta a raíz de la corrupción en las altas esferas del Estado, así como relacionadas con los casos irresueltos de justicia transicional; y Honduras, por su parte, desde 2009 tras el Golpe de Estado al gobierno de Manuel Zelaya, ha experimentado la erosión de los derechos humanos y la profundización autoritaria de su régimen, la cual influyó en una fuerte represión a los movimientos de protesta antigolpistas[1] (BROCKETT, 2017).

1 Tras más de una década de movilizaciones y denuncias en contra de los sectores golpistas, el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) ganó las elecciones presidenciales del 2021 con la candidatura de Xiomara Castro de Zelaya.

Nicaragua constituye un caso excepcional, en tanto la derrota electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)en 1990 abrió un proceso de tensiones entre el sandinismo y los movimientos sociales que, aunque ayudó a consolidar la autonomía de organizaciones como las campesinas y las de mujeres, también sufrió un impacto en el movimiento sindical de base, el cual estuvo en la vanguardia de la lucha contra las privatizaciones y el despido de funcionarios del sector público. Los resultados fueron menos alentadores ante las particularidades de las élites políticas, las cuales impulsaron fervientemente la agenda neoliberal a cambio de cuotas de poder político (MARTÍ I PUIG, 2015).

El presente capítulo tiene por objetivo brindar una perspectiva panorámica acerca de las dinámicas de los movimientos y las protestas sociales en Nicaragua y Costa Rica en el siglo XXI, bajo el supuesto de que estos son expresión de la resistencia de los movimientos en la región frente a dos fenómenos que caminan de forma paralela y se refuerzan mutuamente: el autoritarismo y conservadurismo político, junto con la profundización de las reformas neoliberales. En un primer momento, se abordará el caso de Nicaragua, seguido del caso de Costa Rica, ambos para el periodo 2000-2021. En la sección final se retoman algunas reflexiones finales, de cara al devenir de la movilización social para ambos países.

1. Nicaragua (2000-2021): entre el legado revolucionario y la búsqueda de autonomía de los movimientos sociales

Nicaragua llega al siglo de su Bicentenario a través de una serie de transformaciones políticas, sociales y económicas importantes. Si bien la estructuración de la competencia partidaria de los últimos veinte años ha transitado predominantemente hacia la concentración del poder en torno al partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y en particular en la figura de Daniel Ortega, la rearticulación de las fuerzas y colectivos sociales ha experimentado un camino de aprendizaje y crecimiento que también debe ser tomado en cuenta, al margen de los intentos de apropiación de aquellos por parte del partido en el gobierno.

Sobre este marco general, el presente apartado pretende realizar un repaso generalizado por la dinámica de los movimientos sociales en Nicaragua durante lo que se lleva del siglo XXI, tomando en cuenta la particularidad de demandas y actores presentes a lo

largo de estas dos décadas de estudio, así como su relación con el régimen sandinista. En este sentido, el acápite se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, se realiza un recuento sobre la rearticulación de fuerzas políticas y sociales acaecida luego de los Acuerdos de Paz y la transición de la década de los noventa, en el marco de expansión neoliberal en la región; en segunda instancia, se ofrece un repaso de la trayectoria de los tres conglomerados de activismo con mayor presencia en la arena política en los últimos años, a saber, los movimientos campesinos y ambientalistas, los colectivos autonomistas y étnicos, y las organizaciones de mujeres y las luchas por la diversidad sexual; el apartado se cierra con un breve examen de la coyuntura crítica abierta a raíz de las protestas estudiantiles de 2018 y el subsecuente escenario de retroceso autoritario experimentado por las organizaciones sociales desde entonces.

1.1 "Después de la paz": reconstrucción del tejido social, neoliberalismo y el retorno del FSLN

Desde su constitución como movimiento nacional de liberación armado a inicios de la década de los sesenta, el FSLN se caracterizó por sus vínculos con organizaciones sociales de base. A pesar de que en el periodo anterior a la insurrección popular de finales de los setenta ya preexistían muchos colectivos sociales organizados desde diferentes sectores, tales como asociaciones de trabajadores rurales, de educadores, de trabajadores de la salud, y de mujeres, luego del triunfo armado del Ejército Sandinista y el derrocamiento de la dictadura somocista en 1979, estos lograron expandirse –aunque con relativos márgenes de autonomía– conforme al proyecto de democracia popular y asociativa, impulsado por el bando vencedor (BOOTH et al., 2010; MARTÍ I PUIG, 2015).

Luego de la derrota electoral del FSLN, en 1990, y la entrega del poder a la Unión Nacional Opositora (UNO), liderada por la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, la sociedad civil nicaragüense experimentó un proceso de reconstitución, ahora sin el auspicio y recursos oficiales experimentados durante el tiempo que duró el proceso de la Revolución Sandinista (1979-1990) en el mando. A pesar de las contradicciones experimentadas durante el periodo revolucionario en torno a la conformación de una ciudadanía descentralizada en el marco de la devastada economía ocasionada por la guerra, el vínculo de larga data entre

la sociedad civil y el FSLN mantuvo relativa constancia durante las diferentes fases por las cuales ha transitado el sandinismo: como guerrilla, como gobierno revolucionario y como partido político operante en las instituciones. Esta estrecha relación, incluso, es lo que distinguió al FSLN de otras experiencias en la región latinoamericana en el periodo posterior a la tercera ola democratizadora (DAVIS et al., 1999).

En este sentido, la reconversión del FSLN hacia un partido electoral, formalmente asentado y con mayoría legislativa en el Parlamento, durante la década de los noventa, no terminó de minar el vínculo con los movimientos sociales, pero sí generó una serie de transformaciones dentro del gremio sindical: el Frente Nacional de Trabajadores (FNT) nace como un intento de articular de forma independiente a los trabajadores, luego de la derrota de 1990, razón que motivó a que durante aquellos años convulsos, no en pocas ocasiones el FSLN tuviera que fungir como mediador entre estos colectivos y el gobierno (MARTÍ I PUIG, 2015).

Fuente: fotografía de Jorge Mejía Peralta

Aunque llegaron a contar con mayor autonomía respecto de la estrecha relación propia del gobierno revolucionario, las organizaciones sociales mantuvieron su cercanía al sandinismo y se convirtieron en aliados estratégicos del partido consolidando un núcleo de oposición contra las reformas de ajuste estructural (MARTÍ I PUIG, 2008; POLAKOFF y LA RAMÉE, 1997), impulsadas en los años siguientes por las administraciones Barrios de Chamorro (1990-1997), Alemán Lacayo (1997-2002) y Bolaños

Geyer (2002-2007). En este sentido, el sandinismo fue clave en el impulso de una "ciudadanía de alta intensidad" en tiempos en donde la devastación provocada por diez largos años de guerra civil y la transición de la economía desde un sistema planificado hacia uno liberalizado terminaron por extender las condiciones precarias de la ciudadanía.

Aunado a lo anterior, la década de la transición estuvo marcada por un fuerte clima de descomposición social e inseguridad ciudadana, producto del resultado de la guerra, la crisis económica y el bloqueo legislativo de la bancada sandinista. Las elecciones de 1996 fueron ganadas por la alianza liberal que llevó a Arnoldo Alemán al poder, constituyendo un gobierno que, a las dificultades económicas arrastradas de la administración de Violeta Barrios, sumó escándalos de corrupción que sacudieron la unidad de la oposición.

A pesar de que en 2001 los liberales aseguran su continuidad en el poder al resultar electo Enrique Bolaños, por el entonces oficialista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), en 2000 se concretan una serie de pactos entre Alemán y Ortega, entre los que destaca una importante reforma al sistema electoral. Con ello se cimentaron las bases para constreñir el pluralismo político que hasta ese entonces se manifestaba en la Asamblea Nacional y, por defecto, para allanar el futuro retorno del sandinismo al Poder Ejecutivo (MILLET, 2017). Este hecho tuvo un fuerte impacto en el decrecimiento de la movilización popular que caracterizó la primera mitad de la década de los noventa y además motivó un viraje en la articulación de las demandas, las cuales dejaron de concentrarse en las reformas económicas neoliberales para combatir la corrupción y exigir mayor transparencia a las élites políticas. Asimismo, hacia el cambio de siglo, surgieron algunas expresiones populares opuestas al Plan Puebla Panamá y al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos, aunque estas no llegaron a consolidarse en movimientos de mayor calado (MARTÍ I PUIG, 2015).

Aunque el gobierno de Bolaños llegó a mostrar ligeros atisbos de recuperación económica, así como la generación de un clima favorable para la atracción de inversión extranjera, este no logró solventar los problemas estructurales de pobreza extrema e incremento de las desigualdades sociales. En términos de la movilización popular, esta administración fue marcada por la crisis energética derivada del aumento en los precios internacionales

del petróleo, generando un encarecimiento generalizado de los servicios públicos, razón que desencadenó una oleada de protestas en contra de la empresa transnacional Unión Fenosa, empresa distribuidora de energía en el país ante la falta de inversión en infraestructura nacional. Esta afectación también generó paros generalizados en el sector de transporte que desencadenaron enfrentamientos directos entre transportistas y la Policía Nacional. Asimismo, en su último año de gobierno, el gobierno de Bolaños se enfrentó a una huelga organizada por el gremio de la salud que duró seis meses, en donde se luchaba principalmente por la equiparación del salario mínimo del sector con el resto de los países centroamericanos, entre otras garantías. En otros aspectos, el año 2006 también estuvo marcado por demandas a favor de aumentos salariales en el Poder Judicial, así como por movilizaciones de sectores religiosos, los cuales contaron con el apoyo expreso del FSLN, a favor de la prohibición del aborto terapéutico, razón que ocasionó los primeros roces entre el sandinismo y los colectivos de mujeres durante el año electoral (ORTEGA, 2007).

Entre los diversos factores que explican el gane del FSLN en 2006 destacan el ya comentado pacto entre Ortega y Alemán, pero también la división en el seno del oficialismo, el cual sufrió una escisión interna en su partido, y por extensión en su bancada legislativa, por motivo de los sectores afines a Alemán y los adherentes a Bolaños. Para Martí i Puig (2008), en esas elecciones se dieron nuevos realineamientos electorales que desencadenaron "la división del electorado nicaragüense entre aquellos que —más allá de ser sandinistas o liberales— estaban a favor (o en contra) de una lógica partidaria caudillista [...] y una percepción estrictamente instrumental y cortoplacista de las instituciones" (pp. 87-88).

El año 2007 marcará el inicio de la segunda etapa del Sandinismo en el poder y será, precisamente, el comienzo de una nueva fase en la relación entre el FSLN y los movimientos sociales, caracterizada por el aumento de sectores organizados de clase media vinculados con organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales, los cuales ya venían mostrando sus demandas en contra de la corrupción y los pactos de las élites del bipartidismo a inicios de siglo, y han ido mutando conforme el régimen sandinista ha venido coartando los espacios de participación política (MARTÍ

l PUIG, 2009; PÉREZ BALTODANO, 2010, 2011), al tiempo que concentrando el poder a través de las continuas reelecciones de Daniel Ortega hasta la fecha.

1.2 La protesta social en su laberinto: movimientos y organizaciones sociales en la Nicaragua reciente

Como parte de los factores anteriormente mencionados, desde 2007 se ha abierto una ventana múltiple de movilización social en torno al accionar del gobierno sandinista en diversos temas, dentro de los cuales ha prevalecido un eje de demandas en torno a la paulatina erosión de las libertades civiles y el derecho a la protesta. La politización de los tres poderes de la República con el paso del tiempo no solo ha ocasionado una sensación de impunidad ante las élites políticas, sino que también ha significado que la organización, por fuera de los márgenes del FSLN, se haya convertido en un "deporte de alto riesgo" para las y los líderes y militantes de diversos colectivos en Nicaragua (CARRIÓN, 2020; CHAGUACEDA, 2020).

De forma general, puede argumentarse que durante el nuevo siglo las demandas sociales han provenido de tres sectores dominantes en el ejercicio de la protesta, a través de varias coyunturas críticas, a saber, los movimientos campesinos y ambientalistas, los colectivos autonomistas y étnicos, y las organizaciones de mujeres y las luchas por la diversidad sexual. En las líneas siguientes, se desarrolla una breve reseña de las tendencias en la movilización de estos actores.

El movimiento rural-campesino nicaragüense vivió un periodo de auge en la movilización política en tiempos de la Revolución Sandinista, esto en gran parte impulsado por la reforma agraria. No obstante, hacia la década de los noventa, el ajuste estructural de mercado y la contrarreforma en el campo llevado a cabo de forma generalizada dentro de la región, contribuyó a debilitar y a fragmentar el sector, el cual, incluso optó por el camino del "rearme" ante la falta de oportunidades de reinserción para excombatientes provenientes de ambos bandos del conflicto armado de los ochenta. Durante los años posteriores a la transición, no fueron pocos los casos de ataques a terrenos, fincas y poblados rurales organizados por campesinos alzados en armas. La expansión de la frontera agraria hacia la región Caribe motivó que este tipo de

movimientos decayera, generando a su vez, nuevos problemas de degradación ambiental ante el uso extensivo de las tierras y la promoción de proyectos de minería (HORTON, 2013).

Luego de los devastadores efectos del Huracán Mitch en 1998 y la continua crisis económica de la década, a inicios de los 2000 la organización campesina vio perdido gran parte de su caudal de movilización popular, generando a su vez una oleada de migración de habitantes de zonas rurales hacia centro urbanos del país, pero también hacia Costa Rica, Estados Unidos y España. Durante el gobierno de Enrique Bolaños se experimentaron dos coyunturas importantes, relacionadas con la caída de los precios del café en 2001 y, posteriormente, la afectación del Nemagón en la misma producción agrícola: la primera ocasionó un movimiento de bloqueos en la zona de Matagalpa hacia 2002 y el segundo una marcha multitudinaria en 2005 por los efectos nocivos para la salud ante el uso de pesticidas. Estos dos hitos fueron importantes para la revitalización organizada del movimiento, al tiempo que demostraron la inacción y el abandono del sector por parte de las administraciones liberales. Con la llegada del FSLN, el sector campesino ha re-articulado su lucha contra la industria extractivista y la compra extensiva de tierras por capital extranjero y nacional para la expansión hotelera (RUEDA, 2019).

Es en este punto en donde las luchas del movimiento campesino han entrado a emparentar con las de los sectores ambientalistas, esto no solo a través de enmarcar las demandas en torno a la protección del medio ambiente arrasado por los enclaves extractivistas, sino también por la generación de alianzas entre los colectivos sociales opuestos al impulso del gobierno de Ortega para la concesión y construcción de un canal interoceánico sobre el Río San Juan por parte de una empresa de capital chino, conocida como HKND Group, hacia el año 2013. El proyecto concesionario comprometía una buena cantidad de territorios rurales al sur del país, lo que detonó la conformación del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía a finales de 2014. Esta organización anticanalera fue la encargada de promover marchas cívicas a lo largo de todo el territorio nacional entre 2014 y 2016, padeciendo un fuerte clima de represión (RAMÍREZ, 2020; SERRA, 2016; TITTOR, 2018).

Aunque ha llegado a coincidir en gran parte con las luchas enunciadas, la trayectoria del movimiento ambientalista en Nicaragua ha contado con un origen propio en la década de los

noventa, con la organización de ONG's, colectivos ciudadanos y académicos preocupados por la implementación del enfoque ambiental en la elaboración de políticas públicas, como la declaratoria de áreas protegidas y la apertura de escuelas de formación en ciencias naturales. Su accionar contencioso puede ubicarse sobre todo en la década de los 2000, momento en donde las consecuencias del deterioro ambiental comenzaron a volverse palpables en recursos como el acceso a la tierra, el agua potable y la biodiversidad ante el avance del capital transnacional extractivo (RUIZ y LÓPEZ, 2020).

Un caso importante, que ayuda a poner en perspectiva los vínculos entre la lucha ambiental y los sectores rurales-campesinos, ha sido el accionar de la Coalición de Organizaciones por el Derecho al Agua y de los Comités de Agua Potable y Saneamiento en la resistencia contra la privatización del recurso hídrico. Romano (2012, 2019) aduce que estas iniciativas han suscitado coaliciones multisectoriales a nivel nacional que han trascendido el ámbito de la gestión para posicionarse fuertemente dentro del activismo político, más allá del ámbito meramente local o comunal.

Ruiz y López (2020) ubican el periodo de tres mandatos continuos de Ortega como "los de mayor deterioro ambiental y retroceso del marco jurídico ambiental" (p. 620). En este marco, el sector ambientalista ha estado posicionado sobre varios frentes de batalla, sobre todo contra la expansión de la industria minera, la lucha contra el canal interoceánico y la conservación de reservas biológicas como Bosawás e Indio Maíz.

En consonancia con una dimensión territorial de la protesta, los pueblos indígenas y afrodescendientes han sido actores fundamentales en la articulación de demandas referentes al reconocimiento de derechos, a la protección de las regiones autónomas y a la inclusión de sus poblaciones dentro de la dinámica centralista y etnocéntrica del Estado nicaragüense a lo largo de la historia. Esto último debido a que la gran mayoría de estos habitantes se concentra en la región costera del Caribe Nicaragüense. Hoy día en Nicaragua existen más de 300 comunidades y más 20 territorios que aglutinan a localidades que conservan sus tradiciones organizacionales y culturales que, si bien, desde finales de la década de los ochenta han ido ganando reconocimiento y autonomía dentro del cuerpo normativo nacional, así como con la firma de convenios internacionales, han tenido dificultades para el cumplimiento de los alcances materiales

establecidos en los marcos jurídicos ya que persisten los problemas de marginación, pobreza extrema, discriminación racial y étnica, así como por la falta de acceso a recursos fundamentales como la salud y el empleo (CUNNINGHAM, 2020).

Sobre esta fotografía general, la lucha histórica de estos colectivos, la cual puede datar de finales del siglo XIX con la anexión de estas zonas por parte de Nicaragua, ha estado sobre todo centrada en el ejercicio de las demandas de derechos territoriales, por el régimen de autonomía, la garantía de seguridad jurídica sobre las tierras colectivas, el control de los recursos naturales, el ejercicio de la libre determinación y, más recientemente, la militarización de las zonas pobladas por afrodescendientes e indígenas ante la llamada "guerra contra las drogas" en la región Caribe, impulsada desde el gobierno de Bolaños y continuada por Ortega (GOETT, 2017).

Las disputas territoriales y las tensiones con el Estado se han logrado canalizar a través varios casos presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como el caso del pueblo Awas Tingni, en el que el gobierno tuvo que tomar las medidas necesarias para asegurar el reconocimiento de los derechos de propiedad comunal no solo de esta comunidad, sino de todas las poblaciones étnicas habitantes de la Costa Caribe. Asimismo, la alianza gestada durante la década de los noventa entre los pueblos Miskito y Rama, con el apoyo de algunas ONG, ayudó a impulsar las demandas autonomistas que en el 2009 alcanzaron el reconocimiento del territorio Rama y Kriol (Larson, 2010).

A pesar de estos logros en el ámbito territorial, la garantía del ejercicio de derechos políticos ha sido una constante que no se ha logrado solventar en los gobiernos del FSLN, donde, por el contrario, se les ha limitado la participación electoral a los pueblos indígenas. Esto pese a que, desde 2005, exista una sentencia en firme por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante el caso *Yatama vs. Estado de Nicaragua*. En los hechos, la presencia indígena en elecciones municipales, regionales y nacionales se ha visto amedrentada, lo que ha llevado a severas acusaciones de fraude y al desconocimiento de resultados (HALE, 2011; LARSON et al., 2016).

Por su parte, el movimiento de mujeres, el cual goza de una larga trayectoria de incidencia y movilización paradigmática en Nicaragua desde tiempos de la Revolución Sandinista, no ha minado su accionar

con la llegada del nuevo siglo. Desde la búsqueda de autonomía solicitada en la época de la transición hasta el regreso del FSLN al poder, las relaciones entre las organizaciones sociales feministas y el sandinismo han dejado entrever la serie de contradicciones y de agendas opuestas referentes a las políticas sexuales, de género y de derechos humanos (JUBB, 2014). Los colectivos de base de mujeres en Nicaragua se caracterizan por su complejidad, diversidad y variedad de demandas (son integrados por mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas, exiliadas, empresarias, académicas, excombatientes, disidentes del sandinismo, etc.). Un denominador común que puede identificarse es la defensa de su independencia frente a las élites políticas y, más recientemente, por la búsqueda de la democratización de las instituciones políticas y de la representación en el sistema de partidos con perspectiva de género (MEZA y TATAGIBA, 2016).

Como ya se mencionó anteriormente, el hito que marcó la separación entre los movimientos feministas y el sandinismo data de la campaña electoral de 2006, coyuntura en la que Daniel Ortega se alineó con los sectores religiosos del país para oponerse a la legalización del aborto terapéutico. Posteriormente, la iniciativa legal fue ratificada con la unanimidad de la bancada del FSLN en la Asamblea Nacional. Esta "ruptura oficial" formó parte de una serie de procesos políticos que comenzaron a gestarse desde los años posteriores a la conversión del FSLN en un partido electoral, los cuales tuvieron relación, entre otras cosas, con la burocratización de la representación parlamentaria, los pactos con partidos de la derecha y la avanzada de sectores conservadores abiertamente antifeministas (KAMPWIRTH, 2008; LACOMBE, 2014).

El movimiento feminista también ha sido un aliado estratégico para el surgimiento y desarrollo del movimiento LGBTQ en Nicaragua, el cual comenzó a dar sus primeros pasos en la década de 1980, en tanto la Revolución Sandinista impulsó un contexto más apropiado para el autodescubrimiento sexual y para el escape de los núcleos familiares conservadores (la huida al campo representó un espacio para el desenvolvimiento de las identidades diversas) y las normas sociales asociadas con el régimen somocista. Asimismo, la expansión del VIH a nivel mundial durante esa década motivó una articulación de demandas para un sector que todavía no se mostraba organizado de forma pública, pese a que, desde 1985, se encontraban gestando un movimiento dentro de las filas

sandinistas al que llamaron "Grupo Inicio", situación que generó un sentimiento de rechazo y persecución por parte de algunos sectores de la militancia (MCGEE y KAMPWIRTH, 2015).

La situación de relativo ostracismo cambió a partir de 1989, durante la celebración del décimo aniversario de la Revolución, en donde un grupo considerable de personas decidieron marchar como un bloque que los identificaba abiertamente como personas con orientación sexual diversa y militantes del FSLN. Kampwirth (2014) señala, sin embargo, que la entrada del neoliberalismo en la década de los noventa distó mucho de generar un ambiente abierto para los colectivos LGBTQ, ya que durante la administración de Violeta Barrios se aprobó una reforma al artículo 204 del Código Penal que venía a castigar "la sodomía como crimen", así como las "prácticas sexuales escandalosas" entre personas del mismo sexo.

Con este antecedente, luego de la transición, y de la mano de ONG's internacionales, los colectivos de diversidad sexual crecieron y comenzaron a posicionarse como un actor más dentro del sistema político nicaragüense, aunque siempre coaccionados por los efectos represivos del artículo 204 (BABB, 2020). Este proceso caminó paralelamente al alejamiento entre el FSLN y las bases y organizaciones feministas, en buena medida producto de las denuncias de abuso sexual en contra de Daniel Ortega por parte de su hija, Zoilamérica, y del apoyo oficialista a la reforma al código penal que en el 2007 penalizó el aborto terapéutico en el país. Esta fractura cada vez más amplia con el movimiento feminista, pudo haber motivado una suerte de "giro pro LGBTQ" mostrado por el gobierno de Ortega desde 2007, ya que en 2008 el artículo 204 llegó a ser eliminado de la normativa e introduciendo otros en donde se penaliza toda forma de discriminación por razones de orientación sexual (artículo 428). Asimismo, la creación de un puesto de delegación para la diversidad sexual en 2009, y la incorporación de población diversa en las filas de la Juventud Sandinista hablan de una preocupación dentro del oficialismo para acercar a estos grupos.

McGee y Kampwirth (2015) afirman que dicha estrategia forma parte del accionar para "dividir y cooptar" a la sociedad civil implementado por el FSLN desde 2007. En este sentido, Ortega habría estado buscando deshacer las alianzas históricas entre distintos colectivos afines, como el movimiento feminista y el de diversidad sexual, como un mecanismo para mostrar la fachada

de un régimen abierto a la defensa de derechos humanos ante los organismos internacionales de cooperación y financiamiento, o bien lo que se ha dado en llamar *pinkwashing*: "utilizar la retórica de los derechos LGBT es una forma de responder a la comunidad internacional, con suerte distrayéndola de un historial que de otro modo sería desagradable; en este caso, el expediente sobre aborto terapéutico y fraude electoral" (p. 67).

Como parte de lo anterior, no han faltado los roces dentro del movimiento entre quienes reclaman autonomía y descreen del apoyo del gobierno y aquellos que destacan los avances y la convivencia en un clima un poco más tolerante hacia la diversidad sexual. Aunque el movimiento ha distado de lograr conquistas como el matrimonio igualitario, el cual comienza a extenderse con distintas velocidades en América Latina, continúa reinventándose a través de iniciativas como "Operación Queer", colectivo diverso fundado en 2013 el cual incluye perspectivas de activismo interseccional (género/sexualdiad/raza/clase) orientado a reunir los apoyos del sector académico, de los movimientos sociales y culturales (BABB, 2020).

Fuente: fotografía de Jorge Mejía Peralta

1.3 "Todos los caminos conducen a Abril": la actualidad de la movilización popular desde el ciclo de protestas de 2018

Aunque abril de 2018 quedará marcado en la memoria de las y los nicaragüenses como el levantamiento del movimiento estudiantil universitario más importante en lo que se lleva del siglo XXI, puede ser leída también como una coyuntura crítica en la cual llegaron a confluir las demandas de una gran cantidad de movimientos y

colectivos sociales, los cuales venían sufriendo más de una década de represión, erosión de libertades y autoritarismo por parte del gobierno sandinista. Esto se da en el marco de un proceso de conversión hacia un régimen híbrido experimentado desde 2007 en Nicaragua, tiempo en el que la acumulación de descontentos sociales se fue consolidando conforme a la erosión de la institucionalidad democrática, la desaparición de los mecanismos de rendición de cuentas y falta de transparencia en la realización de procesos electorales (MARTÍ I PUIG, 2013).

Como aclara Cabrales (2020a), en un contexto de hibridez del régimen (entre democracia y autoritarismo), los años anteriores al estallido de 2018 se caracterizaron por una dinámica de la protesta que contó con ciertos márgenes para la expresión de demandas, con niveles intermedios de represión estatal, entre las que destacan las provenientes del movimiento campesino anticanalero, de organizaciones de mujeres ante casos de feminicidios, de grupos a favor de reformas electorales, pero también acciones colectivas por parte de trabajadores y trabajadores del sector transporte. En suma, una movilización dispersa y poco articulada entre los distintos actores de la protesta más activos en el país.

La insurrección de abril se entiende mejor como un ciclo de movilización colectiva en principio impulsado por jóvenes estudiantes universitarios de la generación posterior a la transición, los cuales iniciaron una serie de protestas ante la inacción estatal en materia ambiental, específicamente sobre el caso de un incendio forestal no controlado. Este suceso motivó "un despertar" para el movimiento estudiantil, que se había mantenido inactivo durante varios años, pero también un acercamiento con estrategias de organización para la movilización colectiva y para el establecimiento de alianzas con otros sectores, como el ambientalista (PIRKER, 2019). En los días posteriores, y luego de la extinción del incendio, un decreto emitido por Ortega de forma unilateral que pretendía seguir recomendaciones del FMI para establecer cambios en el esquema de seguridad social, vuelve a activar los focos del conflicto al romper con el esquema de pactos establecidos entre la élite económica y el sandinismo, desde su retorno al poder (MARTÍ I PUIG y SERRA, 2020).

Lo anterior abrió una ventana de oportunidades para los movimientos, los cuales con la convocatoria de estudiantes universitarios lograron reunir los apoyos de un amplio sector de organizaciones sociales, bajo la consigna de respeto a los

derechos humanos y el rechazo a la concentración del poder por parte del matrimonio Ortega-Murillo (BRAN y GOETT, 2020; CARRIÓN, 2020). La respuesta gubernamental a estas concentraciones, convocadas en las inmediaciones de la Universidad Centroamericana y el centro comercial Camino de Oriente, fue la de la aplicación directa de la fuerza policial a las personas manifestantes, así como la invasión del campus universitario. La mediatización de la represión fue un factor fundamental para la reproducción de la indignación en otros departamentos del país fuera de Managua y, por ende, para el escalamiento del conflicto: este suceso establece un hito no solo en los términos expuestos, sino también en términos de incidencia de las acciones colectivas, ya que entre los meses de abril y setiembre de 2018 se llegó a registrar un ciclo de más de 2000 eventos de protesta a lo largo del país, continuando durante el año 2019, aunque con una tendencia a la baja por motivo del fuerte clima de represión ante las congregaciones públicas de manifestantes (CABRALES, 2020b).

Dentro de los saldos que deja esta coyuntura, Klein et al. (2021) argumentan que la oleada de protestas de 2018-2019 en Nicaragua constituye un ciclo de movilización no evidenciado al menos desde la transición, en 1990, y único para la región centroamericana. En esta línea, Cabrales (2020a, pp. 91-92) afirma que la coyuntura abrió la posibilidad para la articulación de un "movimiento social nacional" que ha seguido canalizando demandas al régimen desde tres distintos conglomerados, a saber: uno con un mayor grado de institucionalización y validación social, en donde se encuentran la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la Unidad Nacional Azul y Blanco (organización base de la oposición para las elecciones de 2021), y la Articulación de Movimientos Sociales; uno segundo, compuesto por algunas ONG's que mantienen relaciones con el grupo anterior, pero con grados de incidencia más focalizados (género, ambiente, exiliados); y por último, un conglomerado más "radical" que ha impulsado un cambio de régimen, respondiendo, en parte, a la profundización de las demandas ciudadanas a lo largo de la coyuntura de protestas, pero ocasionando, también, una respuesta mucho más violenta, la cual incluso llegó a provocar centenares de personas fallecidas durante la fase más cruenta de la coyuntura.

Fuente: fotografía de Ana Lucía Jiménez Hine

2. Costa Rica (2000-2021): reformismo neoliberal y resistencias ciudadanas

El Bicentenario, conmemorado en 2021, encontró a una Costa Rica enormemente desigual, en donde las brechas entre quienes concentran la mayor parte de la riqueza nacional y quienes se encuentran bajo los índices de pobreza son cada vez mayores y siguen en aumento (ARIAS, SÁNCHEZ y RODRÍGUEZ, 2019). Así, el país es hoy uno de los más desiguales de América Latina (Monge, 2018). Como indican Díaz y Viales (2020), durante los últimos años en Centroamérica se ha experimentado un reforzamiento del avance del reformismo neoliberal, de la mano con un mayor conservadurismo político, en la medida en que precisamente el modelo neoliberal, al privilegiar la libertad de mercado, debilita a las democracias liberales y sus mecanismos.

En este marco, en este trabajo se propone que en Costa Rica los ritmos y la profundización de las reformas neoliberales han marcado los ritmos de las movilizaciones y protestas sociales en el presente siglo, dirigidas en buena medida a intentar frenar las medidas más agresivas en contra de las condiciones de vida de las y los trabajadores, así como a la defensa del ambiente frente a los intereses del mercado transnacional. Esto no ha impedido el surgimiento de nuevos movimientos y agendas que se posicionan con fuerza a nivel nacional y global, como los feminismos de la "cuarta ola", que precisamente han vuelto a vincular las agendas feministas con las demandas redistributivas y económicas. Este apartado tiene como objetivo analizar la dinámica de los movimientos sociales en Costa Rica en el siglo XXI frente al avance gradual de las reformas neoliberales. Como señalan, entre

otros, Robles (2011) y Monge (2014), podemos comprender estos movimientos como resistencias frente al modelo neoliberal de "acumulación por despojo", concepto desarrollado por Harvey (2003). Esto es, la privatización o liberalización de los bienes públicos (estatales, naturales, etc) en favor del capital privado, cada vez más concentrado en pocas manos.

2.1 Los movimientos sociales en la defensa del Estado de bienestar y los servicios públicos frente al despojo neoliberal: "El Combo ICE" y el "No al TLC"

Como indica Robles (2011), al iniciar el siglo XXI las élites centroamericanas, que impulsan el modelo neoliberal, transitaron al "momento del libre comercio", caracterizado por una remodelación normativa del Estado, la ampliación de la regionalización de las élites, la financiarización de las economías, la venta y transnacionalización de las empresas nacionales y la "gerentización" de los grupos de poder en favor de los grandes capitales transnacionales. Esta nueva normativa y este "momento" posibilitaron la apertura de nuevos espacios de acumulación por desposesión, tales como la biodiversidad, la salud, los seguros, las telecomunicaciones, entre otros (p. 107). Así, el nuevo siglo ha visto una intensificación de los procesos de privatización de los bienes comunes, especialmente luego de la ratificación del TLC con los Estados Unidos en el año 2007 (p. 115).

En Costa Rica, el "momento del libre comercio" habría iniciado precisamente en el año 2000 con el "Combo ICE", una serie de proyectos de ley que buscaban la privatización del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) (ROBLES, 2011). En este escenario, las masivas movilizaciones en contra del Combo expresaron y marcaron la ruta del tipo de conflictividad que ha caracterizado las primeras dos décadas del siglo XX en Costa Rica, entre los movimientos de resistencia al modelo de acumulación por desposesión y al reformismo neoliberal y los actores que impulsan este modelo. Esto ha sido así no solo en Costa Rica, sino en toda la región centroamericana, donde las luchas contra la privatización de la salud, la electricidad, el agua, las telecomunicaciones, etc, han sido una constante (RAVENTÓS, 2016).

De esta forma, Costa Rica ingresó al siglo XXI con uno de los movimientos de protesta social de mayor magnitud de su historia reciente, la lucha ciudadana en contra del llamado "Combo ICE"

en el año 2000. La aprobación de estos proyectos de ley en primer debate en la Asamblea Legislativa generó una masiva oleada nacional de protestas protagonizadas por organizaciones sindicales, estudiantes de las universidades públicas y educación secundaria, organizaciones ambientalistas, feministas, eclesiales, etc., que salieron a las calles con un sentido de defensa de la institución estatal encargada de la producción, distribución y venta de energía eléctrica, frente a los intereses del mercado privado energético y del gran empresariado nacional. Así, una característica esencial de esta lucha fue que posibilitó el surgimiento de alianzas y articulaciones entre diversos sectores (MENJÍVAR, 2004). Esta primera experiencia de articulación ciudadana en contra del despojo neoliberal fue, además, exitosa, en la medida en que, luego de alrededor de 247 actos de protesta contenidos entre el 16 de marzo y el 4 de abril del 2000 en contra del "Combo", la Sala Constitucional frenó los proyectos, señalando varias inconstitucionalidades (GANGAS y RETANA, pp. 98-99).

Para el movimiento ambientalista costarricense esta lucha marca un hito. Según Cartagena, (2009, p. 58) esta fue la primera campaña de movilizaciones en la que dicho movimiento participó en alianza con el sindicalismo del sector público. Entre otras cosas, esta experiencia de lucha conjunta permitió que, posteriormente, conflictos que anteriormente habían sido considerados locales, en contra de la construcción de proyectos hidroeléctricos privados en diversas partes del país, adquirieran relevancia nacional. Según el autor, dos factores que desde entonces han favorecido estos acercamientos entre movimientos son: la apertura de las organizaciones comunales y sociales hacia inquietudes ecológicas y la sensibilidad de un sector del ambientalismo hacia inquietudes redistributivas (p. 59).

Así, si bien los movimientos sociales y ciudadanos empezaron a oponer resistencia frente a las reformas neoliberales del Estado desde la década de 1980 (ALVARENGA, 2005; MORA, 2016), tanto la huelga del Magisterio Nacional en contra de la reforma a su sistema de pensiones en 1995, como la lucha en contra del Combo ICE en el 2000, destacan, no solo por la magnitud e intensidad del movimiento, sino también por los efectos políticos, sociales y culturales de las mismas. Como indica Menjívar (2004), estos expresaron la existencia de tipos de sociedad en disputa, en el marco del avance de las reformas neoliberales. Así, al inicio de este siglo, buena parte del movimiento social costarricense se

encontró en una postura de defensa del orden social, institucional y estatal existente frente a la expresa voluntad de cambio de las fuerzas que impulsan las reformas neoliberales.

Camacho (2005, p. 9) denomina a estas dos fuerzas como "aperturista" y "solidaria". A grandes rasgos, la primera busca dejar a la sociedad a merced de la supuesta capacidad reguladora del mercado, y la segunda apuesta por una sociedad con algún grado de intervención pública para paliar la inequidad y desigualdad intrínseca del modelo neoliberal. A mediados de la primera década del siglo XXI, las fuerzas "aperturistas" habían logrado posicionar varias transformaciones que marcaban un punto de inflexión en el modelo, como las negociaciones del TLC con los Estados Unidos, las propuestas de privatización del ICE, las reformas en los regímenes de pensiones de los y las trabajadoras, el desmantelamiento de las garantías sociales y de las libertades sindicales por medio de sentencias jurídicas, así como el desmantelamiento de varios ministerios de gobierno así como de instituciones autónomas por la vía del desfinanciamiento (p. 10).

En esta misma dirección, Mora (2016) señala que las conflictividades alrededor del mantenimiento, la vigencia y la profundización de las instituciones legadas del Estado social de la segunda mitad del siglo XX han marcado la historia reciente. Esta conflictividad se ha manifestado en las luchas sociales que se han desarrollado a partir de la huelga de 1995, la cual habría marcado la ruta de las disputas del siglo XXI. Este tipo de conflictos han polarizado desde entonces a la sociedad costarricense. En este contexto, para la autora, las movilizaciones populares han ejercido y posicionado una "política de la calle", la cual desborda los espacios de, y a la vez no es reconocida por la política institucionalizada. En "la calle", se discute y se intercambian orientaciones y posturas sobre el rumbo del país. La huelga de 1995, la lucha contra el Combo ICE en el 2000, las protestas en contra de la empresa RITEVE en el 2004, y la lucha ciudadana en contra del TLC con los Estados Unidos entre el 2003 y 2007, son expresión de este fenómeno.

Por su parte, Cordero (2004) identifica a las clases medias que se estructuraron en la segunda mitad del siglo XX en Costa Rica como un componente central de los movimientos y protestas en la resistencia al modelo neoliberal del siglo XXI. Esta clase media, en crisis y amenazada por el nuevo modelo, ha sido en buena medida el motor de la lucha en contra del Combo ICE, del TLC, y de otras protestas significativas del periodo, tales como la lucha contra el

monopolio de la revisión técnica vehicular por parte de la empresa española RITEVE, en el 2004. Así, las organizaciones que han aportado el grueso de las movilizaciones en estas coyunturas, tales como sindicatos del sector público, estudiantiles y campesinas, en gran medida responden a los intereses y están conformadas por la clase media costarricense. Y es que, como señalan Díaz y Viales (2020), la profundización de las reformas neoliberales en América Latina ha provocado la práctica desaparición de las clases medias en la región, y una mayor polarización entre quienes concentran la riqueza y las mayorías que se ven relegadas a la pobreza.

La discusión sobre la adhesión de Costa Rica al TLC con los Estados Unidos, entre 2004 y 2007, marcó un nuevo hito en la resistencia social frente al modelo. Como muestra Raventós (2018), el tratado fue utilizado por las élites costarricenses para impulsar y consolidar reformas neoliberales que habían sido frenadas por la resistencia ciudadana, tales como las que fueron combatidas en el año 2000 como parte del "Combo ICE". Como indica Caamaño (2009), los "comités patrióticos" –unidades de organización de base surgidas en todo el territorio nacional para desplegar la lucha en contra de la aprobación del tratado– estuvieron compuestos mayoritariamente por la clase media costarricense. Según la autora, la derrota del movimiento con la aprobación de la ratificación del TLC por medio del referéndum nacional del 7 de octubre del 2007, y las estrategias desplegadas por las élites que promovieron el tratado en ese proceso electoral, generaron un impacto en la identidad política de este sector de la población que ha participado activamente de la democracia representativa y del modelo de acumulación capitalista emanado de la segunda mitad del siglo XX, y ha sido fundamental para mantener la estabilidad social y política en el país. Así, este proceso habría generado un mayor cuestionamiento por parte de este sector hacia la democracia representativa y al modelo de acumulación vigente. No obstante, aún sin la claridad de cómo y con qué se puede sustituir.

En la misma dirección, Álvarez (2011) señala que la participación del movimiento en la campaña política de cara al referéndum de octubre 2007 fue un ejercicio de participación política desde donde se cuestionaron las nociones hegemónicas de democracia y desarrollo, donde se generaron formas alternativas y novedosas de entender y vivir la política desde la ciudadanía. Según la autora, esta experiencia tuvo una importante conexión con los

procesos de resistencia regionales a la globalización neoliberal, donde la crítica desde los movimientos sociales hacia las formas autoritarias mediante las cuales se han impuesto las políticas neoliberales han sido centrales, de la mano con las exigencias de participación, acceso a la información, discusión, derecho a la expresión e incidencia política desde la ciudadanía en el rumbo político y económico del país (p. 203). Esto, especialmente en reacción a las formas excluyentes y poco transparentes en las que se manejó el proceso de negociación y discusión del tratado desde la institucionalidad. En este proceso de democratización "desde abajo", la organización territorial de base para discutir e informar sobre el tratado y el uso de la internet fueron las principales estrategias del movimiento (ÁLVAREZ, 2011, p. 203). Los "comités patrióticos" como organización de base, desarrollaron una "pedagogía política participativa", que incluyó la producción de charlas, talleres, volantes, sitios web, visitas casa por casa, entre otras acciones (RAYNER, 2008, p. 74).

Es necesario indicar que esta mayor presencia de la clase media como actor del movimiento no implicó en ningún momento homogeneidad o uniformidad. Por el contrario, el movimiento de "No al TLC" fue ampliamente diverso en sus consignas, vertientes ideológicas, repertorios de lucha, formas organizativas, género, etnia, etc. Sin embargo, esta misma diversidad terminó actuando como una limitante para la trascendencia del movimiento, más allá de su carácter reactivo. Luego de la derrota experimentada en octubre del 2007, tras la ratificación del tratado, el movimiento entró en un proceso de declive y fragmentación (FRANCESCHI, 2018).

Por su parte, Morales (2011) rescata el papel protagónico de las mujeres en el movimiento del "No al TLC" y en la lucha por la vigencia del Estado social frente al reformismo neoliberal. Esto debido a los mayores impactos que la globalización neoliberal tiene en las mujeres, en términos de exclusión, desigualdad y pobreza. Así, esta participación ha permitido vincular la denuncia de las injusticias sociales, económicas, políticas y de género.

2.2 La defensa del ambiente y del territorio frente al despojo neoliberal

Como se señaló anteriormente, los movimientos ecologistas han salido al paso de las presiones y disputas que este modelo supone sobre la naturaleza, por lo que, como indica Pearson (2010), la vida biológica se ha convertido en un campo de disputa de la soberanía en el contexto de la globalización económica neoliberal, y en objeto de preocupación política. La aprobación del TLC con Estados Unidos supuso nuevas presiones en este sentido, especialmente por la posibilidad abierta de patentar organismos vivos, con derechos de propiedad intelectual sobre los mismos. Así, el movimiento ecologista fue un actor relevante en la lucha contra el tratado y, posterior a su aprobación, en la lucha por la moratoria al uso de transgénicos en suelo nacional y en defensa de la biodiversidad, y en contra de la patentización de semillas.

En este sentido, Monge (2014) vincula el crecimiento cuantitativo de conflictos socioambientales en Costa Rica en el siglo XXI directamente con la consolidación del modelo de acumulación por despojo o desposesión. En su mayoría, estos han sido protagonizados por movimientos ambientalistas de base comunitaria en contra de los intereses de empresas transnacionales que anteponen los intereses de lucro frente al acceso y el bienestar común, así como frente a un Estado permisivo para con el accionar empresarial. Estos conflictos han adquirido con facilidad dimensiones nacionales, tanto por la agencia de la población como por la tendencia hacia la judicialización de los mismos. Estos movimientos en su mayoría generan resistencias frente a actividades extractivistas, tales como la expansión de los agronegocios, de las represas hidroeléctricas, y del desarrollo del turismo (pp. 35-37).

En esta misma dirección apuntan Alvarado et al. (2020). Al analizar la protesta en el campo costarricense en el periodo 2014-2018, encuentran que dicha conflictividad gira en torno a las tensiones que introduce el modelo de desarrollo en las formas de entender la relación con la "tierra-territorio" y los bienes comunes. Este modelo ha provocado un aumento considerable en cuanto a la desigualdad en la distribución de la tierra, la cual se acentúa en los territorios indígenas, siendo que alrededor de un 20% de los mismos están en manos de personas no indígenas, en su mayoría en uso para la producción de monocultivos. Asimismo, hay una correspondencia entre los cantones con mayor acaparamiento

de fincas agrícolas para monocultivo y un mayor porcentaje de hogares en pobreza. A partir de esto identifican cuatro tipos de conflictos: aquellos en torno a la producción agropecuaria y pesquera, a la relación capital-trabajo, al medio ambiente y los recursos naturales, y, finalmente, a la "tierra-territorio" (pp. 46-50).

En el primer eje de disputa sobresalen los conflictos protagonizados por pequeños productores agrícolas y pescadores artesanales en torno a la importación y exportación agrícola y pesquera, y las demandas por la protección de la producción nacional en el marco de un proceso sostenido de aperturas comerciales. En el segundo eje, destacan los conflictos en las fincas de monocultivo de piña y banano, en las zonas norte y caribe respectivamente, por las condiciones de explotación y sobreexplotación de las personas trabajadoras, quienes han recurrido a la huelga como repertorio de acción en numerosas ocasiones. En el tercer eje, destacan las protestas por la protección del medio ambiente y los recursos naturales frente a las presiones mercantiles, tales como la defensa de los ríos frente a los proyectos hidroeléctricos en el pacífico central y sur, las luchas contra la contaminación por los monocultivos, especialmente piñeros, en las zona norte y caribe, y la defensa del agua y el ambiente frente a la expansión turística en el pacífico norte. En el cuarto eje, sobresalen las luchas por el acceso a la tierra y la defensa del territorio de las comunidades indígenas y campesinas, especialmente en el pacífico sur del país. Destacan aquí los movimientos de recuperación de tierras que las comunidades indígenas de Salitre, Térraba, Cabagra, China Kichá y Curré han llevado a cabo frente a la ineficiencia del Estado en garantizar el derecho de posesión sobre sus territorios (ALVARADO, MARTÍNEZ y FERNÁNDEZ, 2020, pp. 52-60).

Como indican Silveti y Cáceres (2015), el monocultivo destinado a la exportación ha avanzado en detrimento de los ecosistemas autóctonos, de la producción de alimentos para la subsistencia y de las poblaciones rurales, especialmente las plantaciones piñeras, como expresión de la presión extractivista que han supuesto las políticas neoliberales en el país. Este modelo supone la apropiación privada del capital natural y de las posibilidades de reproducción social del campesinado. En este contexto, los movimientos campesinos han desarrollado estrategias de resistencia luchando por justicia ambiental, un modelo productivo alternativo y una institucionalidad socioambiental que les ampare frente a las empresas transnacionales que dominan este negocio

(p. 3). El agua se ha vuelto un recurso estratégico en esta disputa, marcando así un conflicto entre su apropiación privada, a través de la sobreexplotación y contaminación, y su acceso público para la reproducción social de la vida. La lucha de las comunidades del cantón de Siquirres, en la provincia de Limón, ha sido ejemplar en esa dirección (p. 14-15). Los territorios cercados por las plantaciones o "enclosures", se han convertido en "territorios de desposesión" (p. 18).

En la lucha por el agua como un bien común frente a la apropiación privada, destaca, además, la comunidad de Sardinal, en la provincia de Guanacaste, en la costa pacífica, sitiada por un amplio desarrollo de megaproyectos turísticos, entre el 2008 y 2009. El agua de la comunidad de Sardinal estaba siendo redireccionada hacia las zonas de megaproyectos hoteleros. Como señala Rayner (2008, p. 82), una de las particularidades de este conflicto es que su escala trascendió de lo local a lo nacional, gracias en buena medida a organizaciones conformadas en el marco de la lucha en contra del TLC. La represión ejercida por el Estado en contra de la lucha comunal también contribuyó a proyectar el conflicto como parte de las resistencias ciudadanas frente al despojo neoliberal. Este cambio de escala en la lucha y el acompañamiento desde diversas partes del país terminó incidiendo en la conciencia política de la comunidad.

Como indica Silva (2016, pp. 18-25), el caso de Sardinal se enmarca en la problemática generalizada de las comunidades de la provincia de Guanacaste frente al modelo de desarrollo mega turístico, que pone en peligro la seguridad en el abastecimiento de agua para estas comunidades, por la alta demanda de los grandes hoteles e infraestructura turística en general. Precisamente, la exportación de servicios turísticos ha sido una pieza medular del nuevo modelo económico de diversificación de exportaciones surgido en la década de 1980. El desfinanciamiento de los sectores productivos agropecuarios tradicionales ha llevado a estas comunidades a apostar por el turismo a gran escala para sobrevivir, lo que ha implicado un gran aumento en el desempleo, la desigualdad, la especulación con el incremento en el valor de las tierras y el despojo de estas, así como otras problemáticas asociadas. El caso de Sardinal permite comprender la forma en la que operan los desarrollos turísticos de tipo "enclave", que predominan en el pacífico costarricense, así como las resistencias de las comunidades frente a esta dinámica (p. 148). Según datos

del Banco Central de Costa Rica, entre el 2012 y el 2016, la industria turística pasó de representar un 4,4% a un 6,3% del PIB nacional (ICT, 2020).

La lucha de la comunidad de Crucitas, del cantón de San Carlos, en la zona norte del país, en contra de la minería a cielo abierto y de la empresa canadiense Industrias Infinito Gold S.A, es otro referente nacional de la resistencia en contra del modelo extractivista. Como señala Arévalo (2016), si bien el origen del conflicto data de la década de 1990, la declaratoria de interés público y conveniencia nacional del proyecto minero por parte del entonces presidente de la República, Óscar Arias Sánchez, en el 2008, marcó una etapa de intensificación del conflicto, en donde la activa resistencia de la comunidad, así como de las organizaciones ambientalistas como la Asociación Norte por la Vida (UNOVIDA), lograron derrotar al proyecto minero, con la aprobación de una moratoria a la minería de oro a cielo abierto en diciembre del 2010, y el retiro de la concesión minera a la empresa canadiense por parte del Tribunal Contencioso Administrativo en el 2011. No obstante, las presiones políticas para derogar la moratoria no han cesado desde entonces.

Es necesario indicar que, si bien en comparación con el resto de la región centroamericana Costa Rica presenta menores índices de violencia política en contra de activistas sociales y populares, las luchas por la defensa del ambiente y del territorio en el presente siglo han dejado un saldo de tres activistas asesinados. Estos son el ambientalista limonense Jairo Mora Sandoval en el 2013, y los indígenas Sergio Rojas Ortiz, en 2019 y Jehry Rivera Rivera, en 2020, ambos en el pacífico sur del país. De esta forma, es posible constatar una intensificación no solo cuantitativa sino cualitativa de los conflictos por la defensa del territorio frente al despojo neoliberal.

2.3 Autoritarismo institucional y el sindicalismo del sector público en la resistencia al modelo

Como se ha venido indicando, las organizaciones sindicales del sector público han sido claras protagonistas en la resistencia frente al avance de las reformas neoliberales en el siglo XXI. Como sistematizan Alvarado, Cortés y Sáenz (2021) los sindicatos del sector público se muestran como las organizaciones que más acciones de protesta desarrollan anualmente desde el

año 2000. Sus demandas tienden a tener un carácter más general que gremial, en su mayoría vinculadas a la defensa de la institucionalidad y los servicios públicos frente al desmantelamiento, desfinanciamiento y/o privatización, propias del despojo neoliberal. Mayoritariamente, sus acciones han transcurrido mediante repertorios institucionales. No obstante, su comportamiento en buena medida está en función de la capacidad de los gobiernos de turno de negociar y alcanzar consensos entre los actores en disputa. En momentos donde ha existido un entorno político cerrado, la protesta ha tendido a radicalizarse y a recurrir a repertorios de calle o no institucionales.

Fuente: fotografía de Victoria Reay

Destaca así no solo su participación en los dos movimientos de protesta más grandes de inicios de este siglo, la lucha en contra del Combo ICE en el 2000 y en contra del TLC con Estados Unidos entre el 2003 y 2007, sino también en contra de la privatización de los puertos del Caribe durante el gobierno de Arias Sánchez (2006-2010). En esta ocasión, el Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (SINTRAJAP) estuvo al frente del movimiento que intentó sin éxito resistir a la privatización del principal puerto del país en manos de la empresa holandesa APM Terminals. Esta lucha puso en evidencia que, si bien la represión física no ha sido

la norma para hacer frente a la protesta sindical laboral, sí se ha ejercido un autoritarismo institucional importante en momentos de alta conflictividad (ALVARADO, ÁLVAREZ y MORA, 2012).

Esta tendencia se repitió en el movimiento de protesta de mayor magnitud posterior a la lucha en contra del TLC, que fue la huelga general del sector público en contra de la reforma fiscal neoliberal del año 2018, al inicio del gobierno de Carlos Alvarado Quesada (2018-2022). Un entorno político institucional cerrado, el cual ha caracterizado a este gobierno desde su inicio, provocó que la huelga se prolongará por 3 meses, lo que se tradujo en el cierre de centros educativos y la parálisis temporal de otros servicios públicos. A pesar de la magnitud del movimiento, este fue derrotado, la reforma fiscal se aprobó en segundo debate en diciembre del 2018 sin incorporar ninguna de sus demandas (ALVARADO, CORTÉS y SÁENZ, 2021).

En cuanto al movimiento feminista, destacan las luchas en torno a demandas de representación y espacios de toma de decisiones institucionales a inicios del siglo XXI (GONZÁLEZ, 2011) y el avance hacia una agenda más diversa que incluye la lucha por derechos sexuales y reproductivos, y en contra de la violencia. Esto especialmente luego del año 2010, donde la lucha por el Estado laico (ARGUEDAS, 2010), la legalización del aborto, y en contra de la violencia estructural contra las mujeres ejercida por el modelo neoliberal y patriarcal han tomado cada vez más relevancia, de la mano con la denominada "cuarta ola" del feminismo surgida internacionalmente en el año 2015 con el movimiento "Ni Una Menos" y el Paro Internacional de Mujeres (CERVA, 2020; GUILLÉN, 2015; SOUZA, 2019). En cuanto a los movimientos LGBTIQ, estos han experimentado un importante crecimiento en el presente siglo, con demandas fundamentalmente alrededor de la obtención de derechos civiles. Uno de los mejores indicadores del crecimiento cuantitativo y cualitativo, así como de la gran diversidad, de estos movimientos en el país ha sido la conmemoración pública, y cada vez más masiva, del Día del Orgullo desde el año 2003, momento en donde se reivindican las demandas pendientes de la comunidad (JIMÉNEZ, 2017ª), así como la reciente aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo y del reconocimiento legal de la identidad de las personas trans en el país, en el año 2020, luego de más

de una década de luchas en esa dirección (JIMÉNEZ, 2017b; MURILLO, 2020). Costa Rica se convirtió así en el primer país de Centroamérica en aprobar el matrimonio igualitario.

Como se señaló al inicio de esta sección, un efecto generalizado del reforzamiento de las reformas neoliberales en el presente siglo ha sido el debilitamiento y vaciamiento de contenido de las democracias liberales. En Costa Rica, esto se ha expresado, entre otras cosas, en un aumento sostenido en el abstencionismo electoral, a partir de la coyuntura política de 1995, marcada por el pacto público entre las élites político-partidarias para impulsar de forma conjunta la reforma neoliberal y la huelga del Magisterio Nacional en contra de la reforma a su régimen de pensiones. Así, el abstencionismo pasó de un 18,2% en las elecciones de 1994 a un 30% en las de 1998. Entre 1998 y el 2018, esta cifra aumentó a un 34,3% (TSE, 2018, p. 11).

Reflexiones finales

La conmemoración del Bicentenario de la independencia de las repúblicas centroamericanas, en septiembre de 2021, ha llegado a una región profundamente desigual, y, por ende, convulsa. Tal como lo evidencian los casos estudiados de Nicaragua y Costa Rica, los esfuerzos de democratización bajo el paradigma liberal han sido completamente insuficientes en la generación de bienestar para las amplias mayorías de las poblaciones centroamericanas en el presente siglo, en la medida que han caminado de la mano con la implementación de reformas neoliberales que han tendido a desmantelar y destruir el empleo formal, a despojar a las poblaciones de su territorio y sus recursos naturales, a desmantelar y vaciar de contenido las instituciones políticas y estatales, y el sistema democrático en general, frente al valor supremo de la libertad de mercado. La paz social no ha sido así una realidad para la mayoría de los pueblos centroamericanos, en constante movilización por la defensa de los bienes comunes de la región y del acceso público a los mismos.

Esta desregulación creciente de la vida social ha contribuido a hacer de Centroamérica una de las regiones más violentas del mundo, aún luego del fin de los conflictos armados, y, especialmente, una de las más violentas para las mujeres y la población sexualmente diversa, quienes han sido claros protagonistas de la resistencia al modelo de despojo neoliberal, y patriarcal.

Para la revisión global que se ha realizado en torno a la movilización social en Nicaragua, es posible observar la manera en que la dispersión y diversidad de luchas que caracterizaba al sector de las organizaciones de activismo en este país logró activarse y articularse en lo que Cabrales llama un "movimiento social nacional" a partir de la coyuntura crítica de 2018. En esta nueva etapa, se han logrado colocar las demandas desde lugares de enunciación tan diversos como el pequeño y mediano empresariado, los colectivos de mujeres y de la diversidad sexual, el movimiento rural y campesino, las luchas ambientalistas, los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como los medios de comunicación en búsqueda de libertad de expresión.

De forma natural, el impulso inicial del levantamiento de Abril ha ido perdiendo calado en tanto el gobierno nicaragüense decidió recrudecer la represión a las formas de descontento ciudadanas ante el accionar del régimen, razón que ha motivado toda una nueva oleada de exiliados políticos y persecución a profesionales del periodismo no alineados con el oficialismo (Dammert y Malone, 2020; Gómez-Abarca, 2019). A lo anterior se le suma, desde 2020, un manejo poco responsable de la pandemia por el COVID-19, llevando a lo que Miller (2021) denomina como una estrategia de "contagio masivo como política pública", razón que ha motivado pequeños focos de desobediencia civil, como la "cuarentena auto impuesta", como mecanismo para salvaguardar la salud y evitar la expansión del contagio comunitario.

Tras las elecciones generales de 2021 en Nicaragua, las cuales las cuales se desarrollaron en un clima de alta polarización, persecución y encarcelamiento de la oposición y falta de garantías para un desarrollo transparente de los comicios, el carácter represivo del gobierno de Ortega se ha intensificado, por lo que una gran cantidad de personas activistas y liderazgos sociales han tenido que partir al exilio.

En Costa Rica, por su parte, el siglo XXI ha visto una intensificación de los conflictos y disputas alrededor del despojo neoliberal, de las instituciones y servicios públicos, del empleo formal, de los territorios, recursos naturales, entre otros, por las presiones del capital privado y el libre mercado. Ha habido tres coyunturas clave en la radicalización de estos. La lucha en contra del Combo ICE en el 2000, la lucha en contra del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos entre el 2003 y 2007, y la huelga en contra de la reforma fiscal en el 2018. En estas, las clases medias han sido un

actor clave y, si bien no el único, sí el de mayor peso político. Como muestran los estudios para América Latina, la profundización de las reformas neoliberales ha conllevado un ataque directo a las condiciones materiales y subjetivas de vida de este sector de la población (DÍAZ y VIALES, 2020).

Este incremento en la conflictividad social ha ido de la mano con mayores niveles de autoritarismo institucional, de desregulación institucional y de un incremento sostenido en el descontento ciudadano con el sistema político vigente, el cual se expresa, entre otras cosas, a través de un sostenido aumento en los niveles de abstencionismo electoral desde el proceso electoral de 1998. Así, la profundización del modelo neoliberal se presenta como la principal amenaza a la relativa estabilidad social e institucionalidad construida en este país centroamericano en la segunda mitad del siglo XX.

La presente contribución es apenas un primer aliciente para seguir explorando la movilización en la región con perspectiva comparada.

BIBLIOGRAFÍA

ALMEIDA, P. **Mobilizing Democracy: Globalization and Citizen Protest**. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2014.

ALVARADO, A., ÁLVAREZ, M., & MORA, S. Puertos, autoritarismos y resistencias: el conflicto por la concesión de los puertos de Limón. **Revista Reflexiones** (Número Especial. Jornadas de Investigación Interdisciplinaria), San José, pp. 211-222, 2012. https://doi.org/10.15517/rr.v0i0.1534

ALVARADO, A., CORTÉS, S., & SÁENZ, R. La protesta laboral en Costa Rica (2013-2019): actores, repertorios y demandas. **Revista de Ciencias Sociales**, San José, n. 174, pp. 17-40, 2021. https://doi.org/10.15517/rcs.v0i174.52147

ALVARADO, A., MARTÍNEZ, G., & FERNÁNDEZ, G. (2020). Conflictos sociales en el campo costarricense: una mirada desde la protesta social (2014-2018). **Revista de Ciencias Sociales**, San José, v. 1, n. 167, pp. 45-66, 2020. https://doi.org/10.15517/rcs.v0i167.42974

ÁLVAREZ, M. Movimientos sociales y participación política: el movimiento contra el TLC en la campaña del referéndum 2007 en Costa Rica. **Anuario de Estudios Centroamericanos**, San José, n. 37, pp. 201-230, 2011.

ARÉVALO, J. "El oro que contemplan los gusanos, que lo disfruten los humanos". Crucitas y la disputa por el desarrollo en Costa Rica. **Anuario de Estudios Centroamericanos**, San José, n. 42, pp. 133-157, 2016. https://doi.org/10.15517/aeca.v42i1.26941

ARGUEDAS, G. El (aún) tortuoso camino hacia la emancipación: fundamentalismos religiosos, los derechos humanos de grupos históricamente oprimidos y la lucha por un Estado Laico en Costa Rica. **Anuario Centro de Investigación y Estudios Políticos**, San José, n. 1, pp. 50-65, 2010.

BABB, F. (2020). Nicaraguan Legacies: Advances and Setbacks in Feminist and LGBTQ Activism. En: H. FRANCIS (Ed.). **A Nicaraguan Exceptionalism? Debating the Legacy of the Sandinista Revolution** (pp. 165-178). London: Institute of Latin American Studies, School of Advanced Study, University of London, 2020.

BOOTH, J. A., WADE, C. J., & WALKER, T. W. **Understanding Central America: Global Forces**, Rebellion, and Change (5th ed). Boulder, Colorado: Westview Press, 2010.

BRAN, F. S., & GOETT, J. ¡Matria libre y vivir!: Youth Activism and Nicaragua's 2018 Insurrection. **The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology**, Hoboken, v. 25, n. 4, pp. 532-551, 2020. https://doi.org/10.1111/jlca.12531

BROCKETT, C. D. Violence, Peacebuilding, and Democratic Struggles in Central America. **Latin American Research Review,** Pittsburgh, v. 52, n. 3, pp. 495-504, 2017. https://doi.org/10.25222/larr.126

CAAMAÑO, C. La clase media en el movimiento del NO: rupturas y posibilidades después del referéndum. **Revista Reflexiones**, San José, v. 88, n. 1, pp. 9-14, 2009.

CABRALES, S. La oleada de protestas del 2018 en Nicaragua: procesos, mecanismos y resultados. En A. CORTÉS, U. LÓPEZ, & L. MONCADA (Eds.). **Anhelos de un nuevo horizonte. Aportes para una Nicaragua democrática** (pp. 79-95). San José, Costa Rica: FLACSO Costa Rica, 2020a.

CABRALES, S. **The Catholic Church and the 2018 Wave of Protests in Nicaragua** [Master's Thesis, University of Pittsburgh], 2020b. http://d-scholarship.pitt.edu/38768/

CAMACHO, D. El debate sobre los movimientos sociales, aquí y ahora. **Revista de Ciencias Sociales**, San José, v. 4, n. 106, pp. 9-14, 2004.

CARRIÓN, G. Los derechos humanos en la historia reciente de Nicaragua: el peso del olvido en tiempos de dictadura. En A. CORTÉS, U. LÓPEZ, & L. MONCADA (Eds.). **Anhelos de un nuevo horizonte. Aportes para una Nicaragua democrática** (pp. 647-656). San José, Costa Rica: FLACSO Costa Rica, 2020.

CARTAGENA, R. El ambientalismo y la lucha contra el Combo del sector eléctrico (1998-2001). **Revista de Ciencias Sociales**, San José, v. 2-3, n. 128-129, pp. 49-61, 2010. https://doi.org/10.15517/rcs.v0i128-129.8731

CHAGUACEDA, A. Autoritarismo, política local y participación ciudadana en Latinoamérica: miradas cruzadas a los casos de Nicaragua y Venezuela. **América Latina Hoy**, Salamanca, n. 85, pp. 113-133, 2020. https://doi.org/10.14201/alh.20211

CORDERO, A. (2004). **Clases medias, movimientos sociales y política en Costa Rica.** Ponencia presentada en la Conferencia Regional "¿Qué tipos de sociedades tenemos en Centroamérica? Desafíos para las Ciencias Sociales frente al desarrollo social en la región", Costa Rica, 29-30 de abril del 2004. Recuperado de http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Costa_Rica/flacso-cr/20120809032730/clases.pdf

CUNNINGHAM, L. Pueblos indígenas y afrodescendientes: la lucha por sus derechos humanos. En A. CORTÉS, U. LÓPEZ, & L. MONCADA (Eds.). **Anhelos de un nuevo horizonte. Aportes para una Nicaragua democrática** (pp. 633-645). San José, Costa Rica: FLACSO Costa Rica, 2020.

DAMMERT, L., & MALONE, M. F. T. From Community Policing to Political Police in Nicaragua. **European Review of Latin American and Caribbean Studies**, Amsterdam, n. 110, pp. 79-99, 2020. https://doi.org/10.32992/erlacs.10529

DAVIS, C. L., AGUILAR, E. E., & SPEER, J. G. Associations and Activism: Mobilization of Urban Informal Workers in Costa Rica and Nicaragua. **Journal of Interamerican Studies and World Affairs**, New York, v. 41, n. 3, pp. 35-66, 1999. https://doi.org/10.2307/166158

DÍAZ, D., & VIALES, R. Centroamérica: neoliberalismo y COVID-19. **Geopolítica(s): revista de estudios sobre espacio y poder**, Madrid, n. 11 (Especial), pp. 53-59, 2020. https://doi.org/10.5209/geop.69017

FRANCESCHI, H. A once años del referéndum del TLC: vivencias y reflexiones desde la región de Occidente, Costa Rica. **Revista Rupturas**, San José, v. 8, pp. 85-102, 2018. http://dx.doi.org/10.22458/rr.v8i0.2186

GANGAS, P., & RETANA, J. Ciudadanos críticos: las movilizaciones contra el «Combo ICE» en Costa Rica. **América Latina Hoy**, Salamanca, n. 42, pp. 93-108, 2006.

GOETT, J. **Black Autonomy: Race, Gender, and Afro-Nicaraguan Activism**. California: Stanford University Press, 2017.

GÓMEZ-ABARCA, C. de J. Movilización, represión y exilio de jóvenes activistas nicaragüenses. **Anuario de Estudios Centroamericanos**, San José, n. 45, pp. 239-268, 2019. https://doi.org/10.15517/aeca.v45i0.39778

GONZÁLEZ, M. Agenda política del movimiento de mujeres. Demandas de inicios del siglo XXI. **Revista Reflexiones**, San José, v. 90, n. 1, pp. 9-22, 2011.

HALE, C. R. Resistencia para qué? Territory, Autonomy and Neoliberal Entanglements in the 'Empty Spaces' of Central America. **Economy and Society**, Londres, v. 40, n. 2, pp. 184-210, 2011. https://doi.org/10.1080/03085147.2011.548947

HORTON, L. R. From Collectivism to Capitalism: Neoliberalism and Rural Mobilization in Nicaragua. **Latin American Politics and Society**, Hoboken, v. 55, n. 1, pp. 119-140, 2013. https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2013.00186.x

JIMÉNEZ, J. De lo privado a lo público: la celebración del Orgullo LGBTI en Costa Rica, 2003-2016. **Diálogos**. Revista Electrónica en Historia, San José, v. 18, n. 1, pp. 65-90, 2017a https://doi.org/10.15517/dre.v18i1.25719

_____. Matrimonio igualitario en Costa Rica: los orígenes del debate 1994-2006. **Revista de Ciencias Sociales**, San José, v. 1, n. 155, pp. 157-172, 2017b. https://doi.org/10.15517/rcs.v0i155.30261

KAMPWIRTH, K. Abortion, Antifeminism, and the Return of Daniel Ortega: In Nicaragua, Leftist Politics? **Latin American Perspectives**, Thousand Oaks, v. 35, n. 6, pp. 122-136, 2008. https://doi.org/10.1177/0094582X08326020

_____. Organising the Hombre Nuevo Gay: LGBT Politics and the Second Sandinista Revolution: LGBT Politics and the Second Sandinista Revolution. **Bulletin of Latin American Research**, Hoboken, v. 33, n. 3, pp. 319-333, 2014. https://doi.org/10.1111/blar.12068

KLEIN, G. R., CUESTA, J., & CHAGALJ, C. The Nicaragua Protest Crisis in 2018–2019: Assessing the Logic of Government Responses to Protests. **Journal of Politics in Latin America**, Londres, v. 14, n. 1, pp. 55–83, 2021[2022]. https://doi.org/10.1177/1866802X211024246

LACOMBE, D. Struggling Against the 'Worst-Case Scenario'? Strategic Conflicts and Realignments of the Feminist Movement in the Context of the 2006 Nicaraguan Elections: The Feminist Movement and the 2006 Nicaraguan Elections. **Bulletin of Latin American Research**, Hoboken v. 33, n. 3, pp. 274-288, 2014. https://doi.org/10.1111/blar.12173

LARSON, A. M. Making the 'Rules of the Game': Constituting Territory and Authority in Nicaragua's Indigenous Communities. **Land Use Policy**, Amsterdam, v. 27, n. 4, pp. 1143-1152, 2010. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2010.03.004

LARSON, A. M., SOTO, F., MAIRENA, D., MORENO, E., MAIRENA, E., & MENDOZA-LEWIS, J. The Challenge of 'Territory': Weaving the Social Fabric of Indigenous Communities in Nicaragua's Northern Caribbean Autonomous Region: The Challenge of 'Territory'. **Bulletin of Latin American Research**, Hoboken v. 35, n. 3, pp. 322-337, 2016. https://doi.org/10.1111/blar.12365

MARTÍ I PUIG, S. El regreso del FSLN al poder: ¿Es posible hablar de realineamiento electoral en Nicaragua? **Política y gobierno**, Ciudad de México, v. 15, n. 1, pp. 75-112, 2008.

____. Nicaragua 2008: Polarización y pactos. **Revista de Ciencia Política**, Santiago, v. 29, n. 2, pp. 515-531, 2009. https://doi.org/10.4067/S0718-090X2009000200013

____. Nicaragua: La consolidación de un régimen híbrido. **Revista de Ciencia Política**, Santiago, v. 33, n. 1, pp. 269-286, 2013. https://doi.org/10.4067/S0718-090X2013000100013

____. Social Movements in Nicaragua (1979-2014): An Exceptional Case. En P. ALMEIDA & A. CORDERO (Eds.), H**andbook of Social Movements across Latin America** (pp. 301-311). Springer Netherlands, 2015. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9912-6_21

MARTÍ I PUIG, S., & SERRA, M. Nicaragua: De-democratization and Regime Crisis. **Latin American Politics and Society**, Cambridge, v. 62, n. 2, pp. 117-136, 2020. https://doi.org/10.1017/lap.2019.64

MENJÍVAR, M. Acciones colectivas en Costa Rica al final del siglo XX: entre la continuidad y el orden. **Revista de Ciencias Sociales**, San José, v. 4, n. 106, pp. 55-67, 2004.

MCGEE, M. J., & KAMPWIRTH, K. The Co-optation of LGBT Movements in Mexico and Nicaragua: Modernizing Clientelism? **Latin American Politics and Society**, Cambridge, v. 57, n. 4, pp. 51-73, 2015. https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2015.00290.x

MEZA, H., & TATAGIBA, L. Movimentos sociais e partidos políticos: As relações entre o movimento feminista e o sistema de partidos na Nicarágua (1974-2012). **Opinião Pública**, Campina, v. 22, n. 2, pp. 350-384, 2016. https://doi.org/10.1590/1807-01912016222350

MILLER, D. ¿Estrategia singular? El contagio masivo como política de Estado en Nicaragua. En A. ARÉVALO (Ed.). **COVID-19 Nuevas enfermedades, antiguos problemas en Centroamérica** (pp. 59-72). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2021.

MILLET, R. L. Nicaragua: An Uncertain Future. En H. F. KLINE, C. J. WADE, & H. J. WIARDA (Eds.), **Latin American Politics and Development** (Ninth edition, pp. 383-394). Boulder, Colorado: Westview Press, 2017.

MONGE, B. Costa Rica en el top 10 de los países más desiguales del mundo. **Semanario Universidad**. 2018. Disponible en https://semanariouniversidad.com/opinion/costa-rica-en-el-top-10-de-los-paises-mas-desiguales-del-mundo/ Acceso en 07 de octubre de 2023.

MONGE, L. **Formarse y transformarse en la lucha social: ambientalismo costarricense y subjetividad política en la primera década del siglo XXI.** [Tesis para optar por el grado de Magíster en Ciencias Sociales. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Sede Académica Argentina], 2014.

MORA, S. **La política de la calle. Organización y autonomía en la Costa Rica contemporánea**. San José, Costa Rica: EUCR, 2016.

MORALES, R. De los movimientos a la acción política: mujeres organizadas en los comités patrióticos de Costa Rica en la lucha contra el Tratado de Libre Comercio. **Revista Rupturas**, San José, v. 1, n. 2, pp. 190-215, 2012.

MURILLO, A. (27 de mayo de 2020) Una batalla sin fin: Costa Rica abraza al matrimonio igualitario. **Semanario Universidad**. 2020. Disponible en https://semanariouniversidad.com/pais/una-batalla-sin-fin-costa-rica-abraza-al-matrimonio-igualitario/ Acceso en 07 de octubre de 2023

ORTEGA, M. Nicaragua 2006: El regreso del FSLN al poder. **Revista de Ciencia Política**, Santiago, v. 27, pp. 205-219, 2007.

PEARSON, T. Naturaleza, neoliberalismo y soberanía: la vida como espacio de lucha en Costa Rica. **Biocenosis**, San José, v. 24, n. 1-2, pp. 45-53, 2011.

PÉREZ-BALTODANO, A. Nicaragua: Se consolida el Estado por derecho (y se debilita el Estado de Derecho). R**evista de Ciencia Política**, Santiago, v. 30, n. 2, pp. 397-418, 2010. https://doi.org/10.4067/S0718-090X2010000200012

PIRKER, K. Espacios en disputa: Universidades, conflicto y polarización política en Nicaragua. **Universidades**, Montevideo, n. 80, pp. 69-86, 2019. https://doi.org/10.36888/udual.universidades.2019.80.15

POLAKOFF, E., & LA RAMÉE, P. Grass-Roots Organization. En T. W. WALKER (Ed.), **Nicaragua Without Illusions: Regime Transition and Structural Adjustment in the 1990s** (pp. 185-202). Wilmington, Delaware: SR Books, 1997.

RAMÍREZ, F. (2020). El movimiento campesino: la defensa de la tierra, el lago, la soberanía y los derechos humanos. En A. CORTÉS, U. LÓPEZ, & L. MONCADA (Eds.). **Anhelos de un nuevo horizonte. Aportes para una Nicaragua democrática** (pp. 595-608). San José, Costa Rica: FLACSO Costa Rica, 2020.

RAVENTÓS, C. **Mi corazón dice NO: el movimiento de oposición al TLC en Costa Rica**. San José, Costa Rica: EUCR, 2018.

_____. Mobilizing Democracy: Globalization and citizen protest. Paul Almeida [Reseña]. **Anuario de Estudios Centroamericanos**, San José, n. 42, pp. 515-520, 2016. https://doi.org/10.15517/aeca.v42i1.26961

RAYNER, J. Vecinos, ciudadanos y patriotas: los comités patrióticos y el espacio-temporalidad de oposición al neoliberalismo en Costa Rica. **Revista de Ciencias Sociales**, San José, n. 121, pp. 71-87, 2008. https://doi.org/10.15517/rcs.v0i121.10499

ROBLES, F. Los de entonces ya no son los mismos. Acumulación por desposesión en la última década en El Salvador y Costa Rica. **Anuario de Estudios Centroamericanos**, San José, n. 37, pp. 105-137, 2011.

ROMANO, S. T. From Protest to Proposal: The Contentious Politics of the Nicaraguan Anti-Water Privatisation Social Movement. **Bulletin of Latin American Research**, Hoboken, v. 31, n. 4, pp. 499-514, 2012. https://doi.org/10.1111/j.1470-9856.2012.00700.x

_____. **Transforming Rural Water Governance: The Road from Resource Management to Political Activism in Nicaragua**. Arizona: The University of Arizona Press, 2019.

RUEDA, V. Movilizaciones campesinas en Nicaragua (1990-2018): De los rearmados a los auto-convocados. **Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe**, San José, v. 16, n. 1, pp. 1-28, 2019. https://doi.org/10.15517/c.a..v16i2.37499

RUIZ, A., & LÓPEZ, M. Las luchas del movimiento ambientalista de Nicaragua en el siglo XXI. En A. CORTÉS, U. LÓPEZ, & L. MONCADA (Eds.). **Anhelos de un nuevo horizonte. Aportes para una Nicaragua democrática** (pp. 609-631). San José, Costa Rica: FLACSO Costa Rica, 2020.

SERRA, L. El movimiento social nicaragüense por la defensa de la tierra, el agua y la soberanía. **Encuentro**, Managua, n. 104, pp. 38-52, 2016. https://doi.org/10.5377/encuentro.v0i104.2861

SILVA, J.A. **El movimiento social por el agua en Sardinal de Guanacaste.** [Tesis de Licenciatura en Sociología, Universidad de Costa Rica], 2016.

SILVETTI, F., & CÁCERES, D. La expansión de monocultivos de exportación en Argentina y Costa Rica: Conflictos socioambientales y lucha campesina por la justicia ambiental. **Mundo Agrario**, Buenos Aires, v. 16, n. 32, pp. 1-29, 2015.

TITTOR, A. Conflicts About Nicaragua's Interoceanic Canal Project: Framing, Counterframing and Government Strategies. **Cahiers des Amériques latines**, Marsella, n. 87, pp. 117-140. 2018. https://doi.org/10.4000/cal.8561

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. **Participación y abstencionismo: serie histórica elecciones 1982-2018**. San José, Costa Rica: Tribunal Supremo de Elecciones, 2018.

Sobre las fotografías utilizadas en este capítulo.
Jorge Mejía Peralta es el autor de la fotografía de portada, la cual él comparte en su cuenta de Flickr, junto con las otras fotografías que se le atribuyen, todas subidas el 2018. Siguiendo el orden de su aparición en el texto, los enlaces actuales de las fotografías son: https://flic.kr/p/MAhXAS, https://flic.kr/p/28CDr39 y https://flic.kr/p/2gGQ4eB. La imagen atribuida a Ana Lucía Hine fue subida a su cuenta de Flickr en el 2007. Enlace actual: https://flic.kr/p/3JK6rJ . La fotografía atribuida a Victoria Reay fue subida a su cuenta de Flickr en el 2009. Enlace actual: https://flic.kr/p/7iaSyj